



REPUBLICA DE CUBA
Misión Permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza

Nota No. 25/2019

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza saluda atentamente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de referirse a la **Nota G/SO 217/1 de fecha 30 de noviembre de 2018**, sobre la labor del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias.

Al respecto, la Misión Permanente de Cuba tiene a bien trasladar los comentarios siguientes en relación al cuestionario enviado:

Preguntas 1 a 6:

En Cuba no existen, ni han existido desde 1959, casos de desapariciones forzadas. Tampoco se han registrado denuncias de desapariciones forzadas, ni procesos penales o sentencias dictadas por actos de esa naturaleza. Los elevados niveles de seguridad y tranquilidad ciudadana que existen en el país, la actuación apegada al Derecho de las autoridades públicas y en particular de las encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, y el estricto control popular a que se someten, junto a otros elementos de la cotidianidad cubana, han contribuido a evitar la ocurrencia de este tipo de conductas.

***Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Ginebra***

En la legislación penal cubana estas conductas no están tipificadas explícitamente o de manera independiente. Sin embargo, ello no ha impedido al Estado cubano mantener una actuación coherente con los objetivos que se fijan en la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas.

En la legislación cubana, las provisiones y objetivos de la Convención se han cumplido y asegurado a través de otras figuras delictivas, como el Delito de Privación de Libertad (artículos 279, 280, 281, 282, 283), el Delito de Coacción (artículo 286), el Delito de Genocidio (artículo 116), el Crimen de Apartheid (artículo 120), el Delito de Asesinato (artículo 263) y el Delito de Sustitución de un niño por otro (artículo 308), todos del Código Penal cubano vigente. A través de estas figuras es posible sancionar penalmente a los responsables de las conductas incluidas en el concepto de desaparición forzada estipulado en el artículo 2 de la Convención

El marco jurídico e institucional cubano atraviesa desde hace algunos años por un proceso de actualización y perfeccionamiento, con el objetivo de fortalecer la protección de todos los derechos humanos para todos y atemperar aún más la legislación nacional a los instrumentos internacionales de los que Cuba es parte. En tal sentido, se continúa avanzando para garantizar las precisiones normativas y materiales que prescribe la Convención. Un ejemplo de ello son los estudios en curso para la modificación y actualización del Código Penal, con una visión integral de los cambios que correspondan hacer, entre los que se valoran la tipificación más explícita del delito de desaparición forzada, con arreglo a la Convención.

Por otro lado, el Código Penal, en su artículo 59, prevé que la prescripción de la acción penal puede extinguir la responsabilidad penal. No obstante, el apartado 5 del artículo 64 del propio código, en lo referente a la prescripción de la acción penal, señala que las disposiciones sobre ésta no son aplicables en los delitos de lesa humanidad, categoría en la que se encuentran las modalidades delictivas asociadas a la desaparición forzada. De igual forma, las disposiciones generales sobre la prescripción de la sanción, no son

aplicables a los delitos de lesa humanidad, por mandato del apartado 5 del artículo 65 de la ley penal, como corresponde en actos relacionados con la desaparición forzada.

Tomando en consideración que las desapariciones forzadas no se manifiestan en el Estado Cubano, ni se configuran en nuestra sociedad, no existen unidades especiales dedicadas solamente a la investigación de este tipo de conductas.

Las autoridades facultadas para la investigación y enjuiciamiento de los tipos delictivos asociados a las desapariciones forzadas, son las mismas que para cualquier otro delito. De conformidad con lo establecido en la Ley Procesal Penal cubana en sus artículos del 245 al 260, las autoridades competentes para desarrollar las investigaciones de los delitos son la Policía, el Instructor Penal, el Fiscal, el Tribunal y el Abogado. En el fuero militar, la Ley Procesal Penal Militar establece en su artículo 92 que los encargados de respaldar las investigaciones son el Instructor Fiscal, el órgano de investigación primaria y el Fiscal.

Participan además en las investigaciones, especialistas en diversas materias como la Medicina Legal y la Criminalística; así como profesionales de diferentes ramas que tributan al esclarecimiento integrador de los casos que se investiguen.

Todos los funcionarios llamados a la investigación delictiva son profesionales en sus materias específicas de trabajo, con absoluta preparación y dominio de la normativa legal, los reglamentos y procedimientos que deben seguir, y conocimiento de las garantías constitucionales y procesales que asisten a cada presunto culpable de acto delictivo.

Los delitos del Código Penal asociados a los actos de desaparición forzada son delitos perseguibles de oficio, bastando con que, por cualquier vía, se tenga noticia o conocimiento de su perpetración, para que los mismos sean investigados y juzgados, sin necesidad de que las víctimas o sus familiares

realicen una denuncia. El Estado Cubano cumple su obligación de investigar y procesar los delitos, conforme a la ley.

La Ley de Procedimiento Penal establece los términos precisos para ejecutar las investigaciones sobre los delitos y poner a los autores a disposición de los tribunales competentes. Dichos términos garantizan la celeridad necesaria en las investigaciones y conceden iguales derechos a todos los participantes en los procesos penales.

Preguntas 7 a 12:

Los tribunales, los fiscales, los instructores y la policía cuentan con los recursos necesarios para dar curso a las investigaciones. Los órganos, organismos, organizaciones y otras entidades, incluso las de carácter económico de cualquier clase, están en el ineludible deber de suministrarles los informes, datos y antecedentes que éstos requieran para la investigación del delito en un término que no podrá exceder de veinte días hábiles, contados a partir de la recepción del despacho que solo podrán ser prorrogables excepcionalmente. De no cumplirse con lo solicitado, estas autoridades se dirigirán a los jefes de las instituciones mencionadas para que tomen las medidas oportunas con independencia de cualquier responsabilidad en que pudiera haberse incurrido.

En Cuba no se excluye de la investigación a una fuerza o cuerpo del orden o de seguridad de manera general, sino a los miembros de estas que sean sospechosos o acusados de haber estado implicados en la comisión del delito en cuestión.

En la normativa penal cubana se establecen numerosas atenuantes y agravantes que pueden aplicarse a todos los delitos tipificados. Los delitos asociados a los actos de desaparición forzada también establecen circunstancias atenuantes y agravantes específicas.

Corresponde a los Tribunales Militares el conocimiento de los procesos penales por la comisión de todo hecho punible en que resulte acusado un militar, aun cuando alguno de los participantes o la víctima sean civiles.

Asimismo, los Tribunales Militares podrán conocer de los procesos penales por hechos cometidos en zonas militares, con independencia de la condición de civil o de militar que tengan los participantes en los mencionados hechos.

En la jurisdicción militar rigen los principios del debido proceso, entre los que destacan la contradicción, la oralidad, la objetividad, el derecho a la defensa, la inmediación, la impugnabilidad de los fallos y la publicidad, garantizándose los derechos de las víctimas.

Pregunta 13 a 18:

En el país no ha operado ninguna comisión de la verdad o mecanismo similar.

La ley penal cubana es aplicable a los cubanos y personas sin ciudadanía residentes en Cuba que cometan un delito en el extranjero, si se encuentran en Cuba o son extraditados. Es aplicable también a los cubanos que cometan un delito en el extranjero y sean entregados a Cuba, para ser juzgados por sus tribunales, en cumplimiento de tratados suscritos por la República.

Es aplicable igualmente a los extranjeros y personas sin ciudadanía no residentes en Cuba que cometan un delito en el extranjero, si se encuentran en Cuba y no son extraditados, tanto si residen en el territorio del Estado en que se perpetran los actos como en cualquier otro Estado y siempre que el hecho sea punible también en el lugar de su comisión. Este último requisito no es exigible si el acto constituye un delito contra los intereses fundamentales, políticos o económicos de la República, o contra la humanidad, la dignidad humana o la salud colectiva, o es perseguible en virtud de tratados internacionales.

La protección y atención a las víctimas, denunciantes y testigos están aseguradas desde el comienzo del proceso penal.

La ley penal sanciona a las personas que empleen violencia e intimidación contra las autoridades, un funcionario público o sus agentes, para

impedirles realizar actos de investigación de cualquier naturaleza; así como a testigos u otras personas que hayan contribuido a la ejecución o aplicación de las leyes o disposiciones generales. Por estas razones existen medidas administrativas y penales para impedir que los sospechosos ocupen puestos que les permitan influir en investigaciones o amenazar a personas que intervengan en investigaciones de casos de desapariciones forzadas.

La Ley N° 83 de la Fiscalía General de la República en su artículo 24 referido a la Protección de los Derechos Ciudadanos, define que ese órgano por medio del Fiscal designado, atiende, investiga y responde, en el plazo de sesenta días, las denuncias, quejas y reclamaciones que en el orden legal formulen los ciudadanos.

Cuba tiene en vigor 11 tratados de extradición y 14 acuerdos de asistencia jurídica con cláusulas que también atienden esta cuestión, para un total de 25 acuerdos bilaterales de Asistencia Jurídica Recíproca que incluyen la extradición. Se encuentra vigente además, el Código de Bustamante sobre Derecho Internacional Privado, que en su Título 3 regula la extradición.

El Ministerio de Justicia es la autoridad que determina la extradición en Cuba, que está encargada además de ejecutar los acuerdos de extradición.

El país no ha recibido solicitudes de extradición de personas acusadas de haber cometido actos de desaparición forzada.

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza, aprovecha la ocasión para reiterar a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su consideración.

Ginebra, 10 de enero de 2019